

Debido cumplimiento democrático en las consultas, previas, libres e informadas de los pueblos indígenas en megaproyectos.

Doctorante en derecho Askur Palencia Rodríguez.
Consejero electoral del distrito 10 del instituto electoral y
de participación ciudadana del estado de Jalisco en el
proceso electoral 2020-2021.

Askur.palencia@gmail.com

hello@askurpalencia.com

I. Introducción

Dentro del contexto jurídico nacional e internacional los derechos de los pueblos indígenas han tomado un gran punto de relevancia en los últimos años, derivado de ciertos valores, elementos y factores claves para el respeto a estos grupos, en razón de una deuda continua que se acumula a lo largo de los años ante la progresividad de la sociedad, el derecho y la política, creando nuevos mecanismos de participación integral y la materia electoral no es la excepción, a lo largo de la vida electoral en México han existido cambios importantes para el beneficio de la sociedad, siendo estos la creación de institutos autónomos, órganos jurisdiccionales y derechos políticos electorales con mayor grado de acción, tal es el caso en la relación con los pueblos indígenas una área multidisciplinar al tener consigo rasgos de antropología, sociología, cultura, economía, política entre otros aspectos de suma relevancia para hablar de la relación existen entre el derecho positivo y consuetudinario.

De esta forma y a la gran evolución del derecho humano, existe una figura internacional y nacional interesante en materia de pueblos indígenas que en los últimos años ha tenido un foco de advertencia en México, por la falta de un mecanismo garante, oportuno, eficaz y sobre todo legítimo en materia jurídica, hablamos de la consulta, previa, libre e informada, de los pueblos indígenas, acción que se desarrolla para cualquier tipo de afectación que vulnere su entorno buscando obtener un consentimiento, mismo que se ve vulnerado por los efectos externos a la comunidad, como lo necesidad de elaborar megaproyectos e infraestructura para el desarrollo progresista, figura que es ineficaz al no garantizar los derechos democráticos de los integrantes de la comunidad en dicha consulta,

siendo un componente sin autoridad competente, falta de legitimación, estructura autónoma, ejecución pacífica y fortaleza del sistema consuetudinario.

En las líneas posteriores se postula la intervención del derecho electoral en las consultas, previas, libres e informadas de los pueblos indígenas por medio de autoridades, conceptos y desarrollos judiciales que forman una nueva línea de interpretación y oportunidad al derecho electoral en la tutela a dicha figura, desarrollando las justificantes integrales para que el fenómeno sea un planteamiento eficaz por parte de la autoridad nacional y estatales.

II. Consulta, libre, previa e informada de los pueblos indígenas.

Las reformas estructurales en materia de derechos humanos formaron un nuevo modelo administrativo y jurisdiccional en México, de tal forma que muchos derechos humanos se vieron beneficiados exponiendo una evolución eficaz en dicha materia, por su parte dentro de los pueblos indígenas ciertos derechos de posesión ancestral, cultura, ecosistema y autodeterminación postularon en beneficio de los mismos, así mismo la figura denominada consulta, libre, previa e informada tuvo gran impacto en la infraestructura a lo largo del país, creada con el fin, de garantizar un debido reconocimiento en el patrimonio cultural en la protección de sus usos, costumbres y tradiciones al querer imponer por parte del estado o particular megaproyectos, infraestructura o sistemas de mejora a la sociedad, beneficiando a gran parte de la sociedad y afectando a una población vulnerable perteneciente a las comunidades indígenas.

Por su parte la Comisión Nacional de derechos humanos nos dice que la consulta Es el procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afectan directamente, con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo. El derecho a la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas, acciones de Estado y afectación de las tierras y territorios, que impacte los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos (Melesio, 2013: 05) La consulta a los pueblos indígenas constituye un instrumento de participación que ha sido implementado por el gobierno mexicano y por el movimiento indígena cada uno de

acuerdo con sus propios objetivos. En el caso del gobierno, la mayoría de las veces han sido para legitimar acciones ya decididas con anterioridad y en caso de los movimientos indígenas unas veces han sido para inducir acciones que se consideran las correctas en determinado momento y otras para decir entre todos el camino a tomar (López, 2013: 19).

En tal razón y con el fin de proteger y cumplir con la normativa en la materia desde el año 2005, el consejo consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas diseña un modelo base para la creación de un mecanismo idóneo en materia de consulta, con el fin de dotar un cumplimiento eficaz del convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes.

El cual nos indica el artículo 6° que los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (CDI, 2006: 8).

El protocolo de acción se tomo para garantizar el derecho a consulta en optimas condiciones, más desde un enfoque administrativo, dejando una interpretación constitucional de adopción electoral, al mencionar que es de una forma participativa por medio de procedimientos adecuados para la ejecución de esto, trayendo consigo el tema de la cultura política que se refiere a las creencias, actitudes, valores ideales, sentimientos y evaluaciones predominantes acerca del sistema político (Diamond,1999: 163), así tenemos que la existencia de parámetros político electoral son determinantes en la materia de consulta integral de los pueblos indígenas, por su parte el respeto de los grupos vulnerables a partir

del reconocimiento de su diversidad cultural debe concebirse como una realidad palpable en la tutela de los derechos electorales y la defensa de las comunidades indígenas. Solo así podremos hablar de un estado democrático, acorde a sus aspiraciones de igualdad, libertad y desarrollo (Otalora, 2017: 827),

A su vez la legitimación de la normativa internacional es evidente para el debido cumplimiento de la consultas integrales como autoridad ejecutora, administradora y tal como lo dice el artículo 7, 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (CDI, 2006: 8).

En tal razón el margen aplicativo e intuitivo se gesta una institución de corte indígena y administrativo sin tomar en consideración la gramaticalidad del texto que apertura tintes electorales, además dentro de la normativa nacional la protección al artículo 2º apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica el tema prioritario de crear mecanismo de formulación en las consultas de los planes de desarrollo que dice Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo

y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen (CPEUM, 2021: 11-12), creando el protocolo de actuación para seguir las directrices del deber ser para la creación de consultas, además dicho protocolo primario cuenta con fundamentación en el artículo 2 de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; los artículos 16 y 22 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los artículos 2 y 6 del Reglamento Interno del Consejo Consultivo, fomentando principios, procedimientos y guía para la actuación en los casos que se necesite realizar la consulta a los pueblos.

El mecanismo de interpretación dentro del enfoque electoral en las consultas, es innovador al tener requisitos de participación, aspectos democráticos y políticos al buscar obtener un consentimiento, donde la estructura base de la consulta en la elaboración, autoridad, desarrollo y formalidad es semejante a los mecanismos implementados en las consulta popular, referendun o plebiscito, figuras establecida en la materia electoral por años como autoridad ejecutora, en la consulta a los ciudadanos para la toma de decisiones de un texto normativo en el cual se deben pronunciar a favor o en contra, garantizando el derecho democrático de participar en este ejercicio electoral, en tal razón todas las consultas a realizar donde se requiera una participación, opinión o autorización de un pueblo indígena los instituto electorales estatales o el nacional deben fungir como autoridad generadora y protectora de este ejercicio, como lo menciona en la recomendación general número 27/2016 que dice:

La autoridad responsable es quien tiene el deber principal de consultar cuando existan o pueden existir decisiones o proyectos que afecten los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Puede ser la entidad gubernamental perteneciente a cualquiera de los tres niveles de gobierno, de cualquier sector, o una entidad pública autónoma o descentralizada, que tenga la potestad de autorizar la puesta en marcha de tales medidas o acciones. Sobre este punto se mencionan los siguientes: a) en el orden federal: las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cámaras que integran el Congreso de la Unión y los órganos autónomos; b) en el orden estatal: las dependencias y entidades de la administración

pública, las legislaturas locales y los órganos autónomos locales, y en los municipios: la administración pública municipal. Lo anterior, implica que aun en los casos donde existan contratos y/o concesiones públicas a particulares, no exime a la autoridad de garantizar el derecho a la consulta previa. El órgano técnico de consulta tiene la responsabilidad de preparar a la autoridad responsable durante el proceso, brindando la asesoría técnica y metodológica; tal es el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El órgano garante, funge como testigo de la consulta. En nuestro país, diversas instituciones y organismos han participado y tienen la capacidad de intervenir con esta calidad, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos indígenas de México, ambas de la Secretaría de Gobernación. El Comité Técnico Asesor, se constituye de diversas instancias, con la finalidad de aportar conocimiento, asesoría, metodología, información sustantiva y análisis especializado al proceso de consulta previa, pudiendo integrarse por las Secretarías del Gobierno Federal, las Estatales, los Ayuntamientos, por mencionar algunos.

91. Los grupos asesores de academia y las organizaciones de la sociedad civil son instancias que coadyuvan en la construcción de una metodología intercultural, su intervención tiene por objeto, acompañar y asesorar a los sujetos de consulta cuando así lo requieran. Los observadores pueden ser: el representante de la OIT y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; integrantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos de la ONU, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Organismos Estatales de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil, entre otros (CNDH, 2016 33 – 34).

Dicha recomendación habla sobre la importancia de contar un modelo integral entre autoridades administrativas en el cuidado de los derechos humanos integrales, desde la esfera de datos personales, acceso a la información, transparencia y derechos de los pueblos indígenas, dejando un espacio abierto para la intervención de los organismos electorales en los ejercicios de consulta como autoridad responsable y órgano garante, para no dejar la potestad al organismo que requiere la autorización como autoridad responsable o garante.

III. Los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas

Al hablar de derechos políticos electorales en los pueblos indígenas es entrar a un aspecto desarrollado desde muchos puntos selectos de gran relevancia en el conocimiento político, social, histórico, cultural, jurídico y otros que impactan de lleno en el sistema normativo consuetudinario preestablecido en el sistema positivo que evoluciona a grandes escalas, dejando desprotegidos a estos grupos vulnerables afectados por el impacto económico progresista en el planeta, en tal razón la normativa electoral a encontrado una serie de puntos para adentrar a los pueblos indígenas en la participación política electoral en México.

El inicio primario del derecho es la protección y respeto a la dignidad humana, mecanismo idóneo para iniciar un camino cultura de identidad electoral en México, Kant ha sido posiblemente el filósofo que con mayor insistencia ha subrayado el valor de la dignidad humana sin limitaciones de fronteras políticas o étnicas y sin apelación a los intereses o inclinaciones de la persona (Garzón, 2018: 22). En donde se enfoca directamente a un valor intrínseco de la persona sin importar en que sistema normativo se encuentre este cuenta con una serie de elementos que lo vuelven uno para la coexistencia integral, de la cual es evidente que cuente con una protección ejemplar, en este sentido Kant entiende por humanidad aquellos poderes y capacidades que nos caracterizan como seres racionales en el mundo animal. Estos poderes incluyen aquellos de la personalidad moral que hacen que podamos tener una voluntad buena y de buen carácter moral. A su vez el tener una voluntad buena es lo único que nos puede hacer dignos de ser miembros es decir, del cumplimiento de la ley moral que nos imponemos como legisladores universales por nuestra propia voluntad racional (Garzón, 2018: 27).

Entonces en esta relacion de derechos la dignidad humana va unida en todos los otros derechos vinculados para brindar una verdadera subsistencia de bienestar del ser, resultando entonces que al ser humanos las personas que integran una comunidad indígena estos deben contar con los mismos derechos humanos y agregar otros factores claves para el desarrollo de su cultura, Además de los derechos que tiene como seres humanos y ciudadanos mexicanos, las personas indígenas poseen derechos especiales que se reconocen por su condición de indígena en lo individual y en lo colectivo, como pueblos y comunidades (Jiménez, Aguilar, 2018: 54), Estándares internacionales de los derechos de los pueblos

indígenas en la materia electoral. destacando así que el estado conforme al derecho positivo aplicable debe contar con las disposiciones eficaces en la protección de estos derechos humanos, prerrogativas que traen consigo una responsabilidad doble.

Dentro del derecho electoral los derechos consagrados, siempre se han relacionado con el tema del ejercicio al voto o ser votado, sin tocar otros criterios aplicables en la materia de pueblos indígenas y su participación ante el estado, los derechos políticos se pueden ejercer individual o colectivamente. Individual, al ejercer cada persona los que tienen todos los ciudadanos en este caso, en condiciones especiales por su calidad de indígenas, tal es el caso del derecho al voto. El ejercicio colectivo de los derechos políticos implica la conservación y uso de sus instituciones políticas, de tal manera que el ejercicio colectivo se encuentra íntimamente relacionado con los derechos a la libre determinación la autonomía, la consulta y la participación (Jiménez, Aguilar, 2018: 56)

En tal sentido el derecho electoral dentro de su teoría sustenta un verdadero ejercicio integral de injerencia democrática con la participación no únicamente en el tema del voto si no también en la participación de este como autoridad ilustre aplicada, como se estableció en la materia de consulta en diversos procedimientos electorales, dando como ejemplo la resolución SUP-JDC-9167/2011, entre los integrantes de la comunidad de Cherán y el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoce el derecho a los integrantes de la comunidad indígena del municipio de Cherán, la libre determinación de elegir a sus autoridades por medio de sus prácticas comunes, tomando en cita lo conducente en la sentencia dentro del apartado de antecedentes en el punto séptimo lo siguiente: se debe realizar un estudio antropológico más profundo que permita facilitar la creación de un procedimiento que pueda articular las prácticas y formas de organización política de la comunidad indígena de Cherán con la normatividad estatal de los procedimientos político-electorales. Sin embargo, y por encima de lo anterior se debe instalar una mesa de consulta con las autoridades representativas de la comunidad de Cherán para que, de acuerdo al derecho a la consulta que las comunidades y pueblos indígenas tienen garantizados a nivel nacional e internacional, puedan construir consensuadamente con el Estado el procedimiento que consideren que mejor se adecúa a sus formas de organización social (TEPJF, 2011: 26)

Por su parte al decir que los pueblos indígenas buscan las condiciones para la autogestión. Respeto por el principio de consentimiento libre, previo e informado. Este principio implica que exista una ausencia de coacción, intimidación o manipulación, que el consentimiento haya sido buscado con suficiente antelación a cualquier autorización o inicio de actividades, que se muestre respeto por los requisitos de tiempo de los procesos indígenas de consulta/consenso y que se suministre información plena y comprensible con respecto al impacto probable, participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en cada etapa de cualquier acción que pueda afectarles directa o indirectamente. La participación de los pueblos indígenas puede ser a través de sus autoridades tradicionales o de una organización representativa. Esta participación también puede tomar la forma de cogestión. Consulta con los pueblos indígenas involucrados antes de cualquier acción que pueda afectarles, directa o indirectamente. La consulta asegura que sus preocupaciones e intereses sean compatibles con los objetivos de la actividad o acción prevista (TEPJF, 2011: 30) esto indica que el órgano jurisdiccional en cita, estableció una interpretación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos reconocimiento una observación garante en la materia, al tener un sistema integrado para la protección de su cultura y la prevención de un etnocidio.

Además es importante destacar de la sentencia que se empieza abordar algoritmos paralelos que justifican la intervención de institutos electorales para garantías los principios de los pueblos indígenas, si bien el tema principal es de elección este a su vez se puede contemplar para una evolución de la consulta y el desarrollo del derecho electoral, así como lo establece dentro del principio de pluralismo en los mecanismos para la determinación de la representatividad política: el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades y regirse por sus propias formas de gobierno trae consigo el reconocimiento de diversas formas de participación, consulta y representación directa en el sistema democrático mexicano (TEPJF, 2011: 86) siendo la autodeterminación, la protección a su ecosistema político y el autogobierno, factores claves para la dimensión de la participación en todas las acciones que impacten, cómo la toma de decisiones que afecten su estructura cultural o intereses de comunidad, a su vez lo relevante de la sentencia es el argumento mediático de crear mecanismo de consulta en todas las acciones de entidades locales o federales y que garanticen el verdadero concepto en la esencia de las consultas

previas, libres, e informadas de esta forma se cumple verídicamente en todo momento el debido cumplimiento de los estándares internacionales.

Dicha sentencia pone las bases para que las autoridades electorales puedan participar en el ejercicio de consulta de los pueblos indígenas como autoridad responsable, ejecutoria o técnica siendo este un signo distintivo de la participación democrática que a su vez, los requisitos estandarizados ya están consagrados dentro de la interpretación jurisdiccional dando pie a implementar los en las consultas específicas para la relación de votaciones de tanto a los institutos electorales para la elaboración de dichos formatos como autoridad responsable en la materia cumpliendo con los principios descritos en la materia de consulta, que permiten tener un control de la eficacia y no por intereses subjetivos que se viven en el desarrollo político económico destacando cada uno por su autonomía, virtud que destaca para fomentar una ejecución entre el derecho humano y el derecho electoral elementos primordiales que son:

Endógenos, que el resultado debe ser únicamente derivado de la consulta de la comunidad y no de personas externas teniendo un sentido colectivo,

Libres en el desarrollo de la consulta que deban gestarse un consentimiento sin coacción, acercándose de información, conciliación y participación total para el desarrollo de todas las fases,

Pacíficas significa que estas deben ser adecuadas a cada circunstancia para evitar conflictos internos o externos y no generar puntos de acuerdo,

Informadas relativas a proporcionar los datos suficientes para el entendimiento integral del proyecto, conteniendo documentos, estadísticas y resultados del proyecto para evaluar la ruta crítica en beneficios y perjuicios y no solamente con un tema coactivo económico,

Democráticas las consultas necesitan tener mecanismos de participación electorales por la importancia de la comunidad en la integración de la consulta y agotar en toda medida el desconocimiento de la misma respetando los derechos humanos.

Equitativo en el sentido de que el beneficio es para la colectividad y no de forma individual a quienes promueven o quieren un estímulo económico para la creación de estos megaproyectos.

Socialmente Responsable para responder las necesidades concretas que se busca adoptar en la realización de los proyectos, con propósitos identificados de las autoridades instauradas y promover el crecimiento del pueblo indígena.

Autogestionado en la creación de medidas propias por lo interesados o afectados en el desarrollado de la infraestructura con el fin de tener visualizado en todo momento la organización, estructura y participación del pueblo indígena.

Cada uno de los tópicos se generan con el fin de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, este derivado de la falta de acción por parte de las entidades gubernamentales la protección, prevención y debido cumplimiento en la materia. Principios que están estandarizados en los protocolos de actuación y ratificado por la sentencia, para ser un ejercicio debido en la materia, sin violentar ningún derecho humano, contribuyendo al desarrollo de la vida democrática de las comunidades en la afectación de intereses que afecten el ecosistema de los pueblos indígena, resultando un verdadero ejercicio democrático al fomentar dichos principios, por los cuales dan un claro ejemplo de la facultad electoral extra que puede tener las instituciones, además de que fungen como autoridades responsables en la materia, si bien el objetivo era un tema de derechos políticos electorales, sienta el precedente para poder fungir como autoridad responsable ya que cuenta con todo los organismos, estructura, planificación y personal humano para desarrollar las tareas.

Al crear este modelo participativo híbrido en México, producto del planteamiento que se presentó, se da comienzo a nuevas interrogantes fundamentales que se habrán de atender para el beneficio de las comunidades ancestrales y el estado mexicano dejara ser un foco de alerta ante la comunidad internacional, por no proteger de forma concreta los derechos universales de estos grupos vulnerables, con este modelo se pudo fomentar un consentimiento con mayor relevancia al tener fines democráticos y por medio de autoridades competentes en la materia federal o local.

IV. Atribución electoral de los órganos electorales en el debido cumplimiento de las consultas, previas, libres, informada y de buena fe de los pueblos indígenas.

Si preguntamos a las personas que desconocen la materia electoral ¿Qué son los institutos electorales? y ¿Cuál es su función?, recibiremos en su gran mayoría respuestas en el sentido de que se dedican a las elecciones, debido a que la sociedad ha concebido a estos organismos únicamente con una identidad común, ahora si replicamos la misma pregunta a los conocedores de estas instituciones, podremos tener mejores respuestas más nutritivas y con mayor eficacia en las atribuciones, facultades y forma de trabajar de estas autoridades electorales.

Al hablar del derecho electoral en México, se toman muchos antecedentes que han fortalecido la creación de una doctrina nacional adoptada por la unión de la democracia como el velo soberano del derecho humano, para crear una mejora continua en su vida humana. Las instituciones electorales son asociaciones establecidas por gobiernos, o sus representantes, que están lo suficientemente institucionalizadas para requerir reuniones regulares, mecanismos para la toma de decisiones, personal de tiempo completo y un edificio sede. (Shanks, Kaplan, 1996: 593), mientras que en la materia electoral, las instituciones internacionales no se circunscriben a las organizaciones intergubernamentales e incluyen también a organizaciones de la sociedad civil o incluso de naturaleza mixta, cuyas sedes, miembros y/o programas de acción tienen presencia en dos o más países (Guevara, Rodríguez, 2017: 555), tal es el caso de instituciones internacionales para el beneficio del desarrollo de los pueblos en la vida democrática, a su vez estas instituciones cuentan con un orden jerárquico de orden político sostenidas para la ejecución de los proyectos y diversificar las facultades, teniendo a las instituciones electorales capaces de administrar, organizar, ejecutora y sancionar.

En México tenemos dentro del artículo 41 inciso V apartado A. la postulación del Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores (CPEUM, 2020:142) con estos

principios se genera una protección democrática y participativa que beneficie el crecimiento de la sociedad mexicana.

Con la progresividad que se vive en México en materia de derechos humanos la interpretación que se realiza para no vulnerar derechos humanos es integral, por su parte es importante destacar que a su vez la normativa reglamentaria dota al instituto de facultades extraordinarias para fomentar la vida democrática, en tal razón además de los principios constitucionales la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 30 nos indica cuales son los fines del instituto siendo estos : 1. Son fines del Instituto: a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; c) Integrar el Registro Federal de Electores; d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales; f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia (LEGIPE, 2021, 13). Si bien al hablar de estas finalidades en conjunto con los principios recortes constitucionales crean cómo resultado una ventana de interpretación para el desarrollo de una nueva doctrina en materia de consultas para los pueblos indígenas como autoridad responsable en todas las consultas que se postulen, al decir que debe coadyuvar con la cultura democrática que se traduce en todas las áreas de participación que se generan para la toma de decisiones.

El estado mexicano por medio de sus instituciones electorales locales ha desarrollado ya consultas, para conocer la opinión de los pueblos indígenas en relación con su autodeterminación y elección de autoridades, protegiendo el derecho consuetudinario en su relación con el derecho positivo, teniendo respuestas favorables en materia política electoral pero únicamente en temas de elección y participación.

Entonces las consultas previas, libres, e informadas que se realizan para conocer la viabilidad, puntos de acuerdos y aceptar acciones que afecten el interés de la comunidad indígena, por la construcción de megaproyectos deben ser también interés democrático al tener doctrina jurídica y teórica difusa, donde este acto puede ser realizado por conducto de los órganos electorales y no por los órganos administrativos que son juez y parte en las consultas en materias energética, ambiental entre otros, procesos que vulneran la esfera jurídica en México.

El organismo óptimo para ser autoridad son las instituciones electorales al contar con la infraestructura, personal y la facultad para realizar elecciones, referendum y otro mecanismo de participación que dotan de certeza legal la actividad que este realiza, si bien de momento la facultad que pueda tener es de interpretación al analizar todo el panorama, la intervención de los institutos electorales dará una mejor eficacia para no vulnerar derechos a terceros y así de tener un protocolo de actuación a crear las adecuaciones legislativas pertinentes para que funja como autoridad tangible y mayor credibilidad al momento de este ejercicio.

Bibliográfica.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016, Recomendación general 27/2016, Sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana, Ciudad de México. CNDH.

Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2006, Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes Cuadernillo de legislación indígena, Ciudad de México, CDI.

Constitución política de los estados unidos mexicanos, 2020 México, Porrúa.

Diamond, Larry. (1999). Developing Democracy, Toward Consolidation. Maryland, Johns Hopkins University Press.

Garzón, Ernesto, 2018, Los derechos electorales de los pueblos indígenas en México, Ciudad de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Guevara, Alberto, Rodríguez, Fernanda, 2017, Diccionario electoral Tomo I, Costa Rica/México, Instituto Interamericano de Derechos humanos.

Jiménez, leila, 2018, Aguilar, Marisol, Estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas aplicados a la materia electoral, Ciudad de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 2021, México, Porrúa.

López, Francisco, 2013, El derecho de los pueblos indígenas de México a la consulta, Oaxaca Servicios para una Educación Alternativa A.C.

Melesio, Josefina, 2013, El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Ciudad de México. Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Otalora, Janine, 2017, Diccionario electoral Tomo II, Costa Rica/México, Instituto Interamericano de Derechos humanos.

Tribunal electoral del poder judicial de la federación, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. expediente: SUP-JDC-9167/2011. México.

Shanks, Cherly., Jacobson, Henry & Kaplan, Jeffrey (1996). Inertia and Change in the Constellation of International Governmental Organizations, 1981-1992. International Organization, United Kingdom Cambridge University.